

Primero: se confirma en todas sus partes, la sentencia pronunciada por el Tribunal de Circuito de Querétaro, en 30 de Diciembre próximo pasado, que declara; 1º: se absuelve á Ignacio Suveau Franco, del delito de tenencia de instrumentos de fabricacion de moneda de que se le hizo cargo, los que se destruirán, segun lo previene el artículo 206 del código de procedimientos; 2º: se declara sin efecto la pretension del Ministerio público, sobre la multa que pretende se imponga por la inversion del papel de que se hizo uso por el defensor del procesado en primera instancia.

Devuélvanse las actuaciones al Tribunal de Circuito de Querétaro, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes. Hágase saber y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron la 1ª Sala de la Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogaszon.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia. México, Enero 6 de 1874.
Alejo Gomez Elguarte,

AMPARO.

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Aguascalientes por Don Jacinto Medina, contra el C. Juez 3º de 1ª instancia de la Capital de ese Estado, por violacion de los artículos 17, 18 y 19 de la Constitucion.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: Jacinto Medina solicita amparo por violacion de garantías individuales é infraccion de los artículos 17, 18 y 19 de la Constitucion general, contra el Juez 3º de letras que lo tiene en prision

desde el dia 28 del mes próximo pasado, dejando entender en su escrito de queja, que la causa de ese procedimiento es no haber podido dar cumplimiento á un convenio de carácter meramente civil á que se refiere un certificado que acompaña, y pide la suspension inmediata del acto que reclama, mediante que concluye con que se le ponga luego en libertad; pero en el informe que se ha recabado de la autoridad responsable, se dice que Medina es acusado del delito de hurto con abuso de confianza; y que este fué el verdadero motivo de su aprehension y de que se le declarara formalmente preso desde el dia 1º del corriente mes, como se ha verificado.

Parece pues, que la narracion de los hechos en que se funda la queja es poco verídica, así como que los procedimientos que la originan están, por parte del Juez que los ejecuta, revestidos de ciertas formalidades legales, y son conformes con los preceptos constitucionales que tienen aplicacion en los casos de un juicio criminal. Con estos antecedentes, cree el suscrito que no procede la suspension que se solicita, y pide al Juzgado, á nombre del Ministerio público, que así se resuelva, con fundamento del artículo 5º de la ley de 20 de Enero de 1869, reservándose pedir, en cuanto á lo principal del recurso, cuando el juicio llegue á ese estado, y le toque hablar de ese punto.

Aguascalientes, Setiembre 4 de 1873.—*E. Parga.*

Es copia que certifico. Aguascalientes, 4 de Setiembre de 1873.—*E. Parga.*

Segundo pedimento del C. Promotor fiscal.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal que suscribe, evacuando el traslado que le corresponde en este juicio de amparo promovido por Jacinto Medina contra el Juez 3º de 1ª instancia del Estado, dice: que del informe con

justificacion rendido por la autoridad responsable del acto que se reclama, consta que los procedimientos de esta están basados en la acusacion que contra el quejoso se hace de haber cometido un delito, en cuya virtud se anima un juicio criminal, y se ha decretado la correspondiente prision. Así lo manifiesta el testimonio de las constancias que obran en el relacionado juicio con que el Juez justifica su informe segundo, y quedan desvirtuados los asertos del quejoso, supuesto que no aparece la violacion de las garantías de los artículos 17, 18 y 19 de la Constitucion en que funda su ocurso con que dá principio este juicio de amparo, resultando á la vez legalizados los procedimientos del Juez informante.

No hay por lo mismo mérito para conceder el amparo que se solicita; y el infrascripto pide se resuelva, que la Justicia de la Union no acuerda la proteccion que se desea por parte de Medina; y que siendo este acreedor á la multa de que habla el artículo 16 de la ley de 20 de Enero de 1869, se le imponga la que corresponda, al tiempo de sentenciar este recurso.

Aguascalientes, Setiembre 10 de 1873.

—*E. Parga.*

Es copia que certificó. Aguascalientes, 10 de Setiembre de 1873.—*E. Parga.*

Alegato del C. Promotor fiscal.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice alegando en este juicio: que á pesar de haberse señalado el término para prueba, ninguna absolutamente se rindió por el promovente del recurso, y las cosas permanecen en el estado en que se encontraron al evacuar el traslado que se dió al suscrito, despues de recibido el informe con justificacion, para que pidiera sobre lo principal del mencionado recurso. Nada hay pues nuevo de que hacer mérito en este alegato, y el Promotor reproduciendo lo que tiene expuesto, se limita á decir: que

no estando desvirtuado el informe con justificacion de la autoridad responsable del acto que se reclama, quedan en pié los asertos de aquella, de donde se deduce, que el solicitante del amparo no ha sido puesto preso por deudas de un carácter puramente civil, sino que estando indiciado de hurto, el procedimiento se funda en la acusacion de un delito que merece pena corporal, y que se ha motivado el auto de prision correspondiente, siendo en consecuencia inexacta la violacion de garantías de los artículos 17, 18 y 19 de la Constitucion, de que se queja Medina. En tal concepto, es de denegarse el amparo que se pide de la Justicia Federal, é imponerse la multa respectiva de la ley de 20 de Enero de 1869, como ya antes lo solicitó el suscrito.

Aguascalientes, Setiembre 27 de 1873.

—*E. Parga.*

Es copia que certificó. Aguascalientes, 27 de Setiembre de 1873.—*E. Parga.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Aguascalientes, 3 de Octubre de 1873.

—Vistos: Don Jacinto Medina, mayor de edad y de esta vecindad, se presentó á este Juzgado por ocurso de 2 de Setiembre próximo pasado, pidiendo amparo á la Justicia Federal contra el C. Juez 3º de 1ª instancia de esta Ciudad, por violacion en su persona de los artículos 17, 18 y 19 de la Constitucion general de la República, con el hecho de haberlo mandado poner en prision desde las cuatro de la tarde del dia 28 de Agosto, por un crédito que contrajo con Don Blas Macias, y de que hasta las once de la mañana del dia 2 de Setiembre en que presentó su ocurso, y pidió en consecuencia la suspension del acto reclamado. Tramitado el juicio y solicitado el informe de la autoridad ejecutora, esta lo dió manifestando: que el referido Medina fué acusado por el delito de hurto con abuso de confianza, y que juzgado por tal motivo, se libró la ór-

En para su detencion, se le tomó su declaracion preparatoria al dia siguiente, y el 1º de Setiembre se le notificó el auto de bien resoluto. El C. Promotor fiscal con apoyo del informe referido, pidió se denegara la suspension del acto reclamado; y hecha de conformidad la correspondiente declaracion, y recibido el que debia darse con justificacion que rindió el Juez respectivo, se abrió el juicio á prueba por el término de ocho dias, y concluido sin que la parte quejosa promoviera justificante alguno, se señaló el término para los últimos alegatos y citó para sentencia.

En tal estado, el Juez que suscribe, considerando: que para determinar lo conveniente sobre la peticion del quejoso, debiéndose al informe del C. Juez 3º de 1ª instancia que tiene la presuncion de ser verídico, mientras no se contradiga y se justifique lo contrario: que de su conteste resulta: que el solicitante del amparo no ha sido puesto preso por una deuda de un carácter meramente civil, sino que estando indiciado de hurto con abuso de confianza, el procedimiento se fundó en la acusacion de un delito que merece pena corporal: que motivado el auto de prision y héchosele saber en términos hábiles, no hay la violacion que se ha reclamado de los artículos 17, 18 y 19 de la Constitucion Federal; y por lo tanto, de conformidad con lo prevenido en los artículos 101 y 102 de la misma, y 1º y 2º de la ley de 20 de Enero de 1869, se decreta: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á Don Jacinto Medina, contra el procedimiento del C. Juez 3º de 1ª instancia de esta Capital, que lo juzga y puso preso, por no haberse violado en la persona de aquel las garantías de que hace mérito. Notifíquese esta sentencia; sáquense copias para su publicacion en los periódicos, y remítase con el expediente á la Suprema Corte de Justicia para los efectos legales.

Así el C. Juez de Distrito del Estado, definitivamente juzgando, lo decretó y fir-

mó. Doy fé.—*Isidro Arteaga.*—*Silverio Arteaga.*

Es copia que certifico. Aguascalientes, 4 de Octubre de 1873.—*Silverio Arteaga*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Octubre 17 de 1873.—Visto el recurso de amparo que en 2 de Setiembre último, promovió en la ciudad de Aguascalientes, ante el Juez de Distrito del Estado del mismo nombre, D. Jacinto Medina, contra las providencias del Juzgado 3º de 1ª instancia, por las cuales el promovente alega que ha sido puesto en prision y se le tiene en ella, violando en su persona las garantías que otorgan los artículos 17, 18 y 19 de la Constitucion federal.

Vistas las constancias de autos y atenta la sentencia del Juez de Distrito, en que deniega el amparo pedido, por cuanto á que la prision y duracion de ésta, reclamada por el quejoso, proceden de un proceso que contra él sigue, como acusado de hurto con abuso de confianza, el Juez referido de 1ª instancia, proceso en que se han llenado los requisitos legales. Por los fundamentos expuestos, y con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve: se confirma la sentencia del Juez de Distrito de Aguascalientes, pronunciada en 3 del corriente, declarando: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á D. Jacinto Medina, contra el procedimiento del Juez 3º de 1ª instancia de Aguascalientes, que lo juzga y puso preso, por no haberse violado en la persona de aquel, las garantías de que hace mérito.

Devuélvanse las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decreta-

ron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*P. Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Artcaga.*—*P. Orlaz.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, 20 Octubre de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de San Luis Potosí por el C. Lic. Genaro Raigosa, en favor de Andres Castro que fué condenado á muerte por el C. Jefe político de la Capital de ese Estado, por varios delitos de robo con asalto.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor dice: que el Señor defensor Lic. D. Genaro Raigosa, solicita amparo de la Justicia de la Union, por haber sido sentenciado á muerte por la Jefatura política de la Capital su encomendado Andres Castro, acusado del delito de robo con asalto perpetrado en la persona de Evaristo Saavedra, la tarde del 13 de Setiembre del corriente año, y por otros hechos criminales anteriores, cuyos antecedentes se han acumulado al proceso últimamente instruido por aquella autoridad. Dicho Señor Letrado, cree violadas en la persona de Castro las garantías individuales que la Constitucion general de la República concede á los ciudadanos en sus artículos 13, 14 y 21, y conceptua comprendido el caso, en la frac-

TOMO V.—PARTE II.

cion 1ª del artículo 1º de la ley de 20 de Enero de 1869.

En consecuencia, se trata de la procedencia y aplicacion legal de la ley de 3 de Mayo del corriente año, expedida contra los salteadores y plagiaros, cuya disposicion se dice privativa y especial, y no emanada legítimamente de la Constitucion general; y se niega que haya sido aplicada debidamente, por ser estraña é incompetente la autoridad que impuso aquella pena.

El Ministerio no está conforme en que tal disposicion se caracteriza de especial y privativa, porque siendo dada para delitos muy comunes y nada raros, que siempre y en la mas antigua legislacion se han castigado, desde que tuvo origen el robo con mas ó menos circunstancias agravantes ó atenuantes, propiamente no hay esa especialidad; por que tal disposicion no se dirige á un individuo solo, sino á la clase en general de aquellos que no respetando ni la vida, ni la propiedad del ciudadano, se aprovechan ó apropian de una y otra cosa, y he aquí que no es individual aquella prohibicion penal, y por lo mismo no debe reputarse privativa, cuando ademas, por su objeto se vé que tanto se protege como se castiga por ella.

Menos puede llamarse tambien retroactiva, para el caso del asalto, robo y asesinato cometido en la persona de Saavedra en Setiembre de este año, cuando para tal fecha ya habia sido expedida la citada ley de 3 de Mayo del año que rige, y como suceso posterior al tiempo en que fué promulgada, no hay duda que está comprendido el caso en sus prescripciones y que no ha sido necesario retroceder para haberse podido aplicar. Es cierto que para los hechos criminales anteriores, de que se cree responsable á Castro, no puede decirse lo mismo; pero debe no olvidarse, que al tiempo de la perpetracion de esos mismos hechos, preexistian las leyes de 18 de Mayo y 23 del mismo mes de los años de 1871 y 1872, que lo mismo que la que nos ocupa, imponian igual pena á los salteadores y plagiaros; y se tie-